



UN ESTADO EN QUIEBRA ETICA E INSTITUCIONAL DECLARA LA GUERRA AL CRIMEN ORGANIZADO. ¡ES LA VIOLENCIA...!

Bertha García Gallegos*

La frase que parece apropiada para ilustrar la visión, actual y posiblemente futura del país, acaba de ser consagrada en los últimos días desde el ejecutivo, a propósito de una ceremonia militar. El Ecuador entrará en una “guerra frontal” contra el crimen organizado, en la cual -y como toda guerra- las fuerzas armadas serán las protagonistas. La frase es celebrada por los jefes militares, repetida por casi todos los medios de comunicación -que además se nutren casi exclusivamente de las opiniones de militares en servicio pasivo, como si el asunto de la seguridad fuera algo inherente solo a ellos.

El “discurso del enemigo” es Replicado también desde líderes políticos como la alcaldesa de Guayaquil, que aportó también con otra frase célebre, dirigida a los policías: “disparen”. Y desde luego, también por una opinión ciudadana paralizada por el miedo. De allí es que, ha surgido esta perspectiva llena de ingenuidades: “disparen y venceremos al enemigo”

Pero resulta que el crimen organizado es un fenómeno muy complejo, cuyas externalizaciones se encuentran, es verdad, en hechos de extrema violencia, como el sicariato, la lucha entre bandas dentro de las cárceles, la extorsión, los tráfico de todo tipo, especialmente de sustancias sujetas a fiscalización. Convive con otro tipo de violencias que tienen que ver con las desmesuradas expectativas de conseguir un dinero fácil, a corto plazo; así como las miserables expectativas de aquellos que por su situación social, falta de todo tipo de recursos de vida no encuentran esperanzas. Es además un fenómeno global e internacionalizado. De modo que si logramos extirparlo de un lugar, aparecerá en otro. Tiene además, dimensiones ocultas y sus principales nexos son las economías sumergidas, los sistemas financieros y los resquicios institucionales sin controles, los mecanismos de manipulación política, las luchas incontrollables e individualistas por el poder. Allí no llegarán los cañones ni las bayonetas. Como fenómeno glocal (global y local) es

como una cuerda en cuyo extremo superior están los poderosos coaligados en mañosos e inconfesables acuerdos; en la otra estarán los miserables, los atrapables, los que llenan las cárceles.

El Ecuador es por hoy, un país que perdió la oportunidad de tener un Estado de Derecho. La Constitución de 2008, no fue necesariamente un producto del caudillismo que se alzó con las esperanzas de cambio. Produjo importantes innovaciones propias de un Estado de Derecho, tales como la separación nítida entre Defensa -espacio de las Fuerzas Armadas- y Seguridad Pública -espacio de la Policía. También el concepto de Seguridad Integral, que responde a la preocupación por el ser humano, su vida y entorno.

En el Boletín anterior, el núm. 76 hablamos de la violencia humana, un objeto de estudio que ha asumido una notable actualidad para explicar que su control a través del cultivo de valores, construcción de normas apropiadas, medidas de prevención, políticas públicas orientadas al bienestar humano, entre otras, serán más apropiadas para conseguir comunidades humanas estables y disminuir las violencias. Para eso es necesario gestionarla con administraciones basadas en la ética pública y en el conocimiento, especialmente, el que proviene de las ciencias humanas y jurídicas, la neurociencia, entre otras. ¡La violencia! El dolor y el miedo no bastan para definirla. Paradójicamente, una pulsión de sobrevivencia y a la vez de destrucción de la especie humana. Las medidas de fuerza no harán sino multiplicarlas.

* Bertha J. García Gallegos. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Profesora Emérita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa-PUCE.

01 UN ESTADO EN QUIEBRA ETICA E INSTITUCIONAL DECLARA LA GUERRA AL CRIMEN ORGANIZADO. ¡ES LA VIOLENCIA...!

02 LEGITIMIDADES Y CONTRALEGITIMIDADES EN EL AMAZONAS COLOMBIANO: UNA LECTURA CRÍTICA DE LA SEGURIDAD LEGITIMIDAD CONTRALEGITIMIDADES EN EL AMAZONAS COLOMBIANO: UNA LECTURA CRÍTICA DE LA SEGURIDAD
César Niño

06 EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS DE FUEGO
Carlos Guillermo Blanco

10 LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO
José Adatty; Milena González; Cinthia Rosero; Valery Sandoval; María Laura Vásquez*

13 CRONOLOGÍA
Enero-Junio 2022

LEGITIMIDADES Y CONTRALEGITIMIDADES EN EL AMAZONAS COLOMBIANO: UNA LECTURA CRÍTICA DE LA SEGURIDAD

César Niño*

INTRODUCCIÓN

La terminación del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016, ha abierto una ventana de oportunidades a la mutación, transformación y adaptación de viejas y nuevas estructuras criminales en todo el territorio. Espacios vacíos dejados por las antiguas FARC, configuraciones de asociación criminal entre las disidencias de aquella guerrilla con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), oficinas de cobro de grupos armados organizados e incluso las relaciones estratégicas entre el crimen nacional con organizaciones extranjeras, son el peligroso coctel que padece el Amazonas colombiano producto de un escenario postfarcarizado, que corresponde a la transformación de los conflictos polisémicos sin las FARC-EP como objeto referente de la violencia.

Este artículo responde a la pregunta ¿cómo se han configurado las legitimidades y contralegitimidades en el Amazonas colombiano en materia de seguridad? A manera de hipótesis se sostiene que se han configurado en un sistema de cohabitacionalidad mutua, en la que las contralegitimidades condicionadas por los grupos criminales suelen ser más fuertes en relación con la población y, al mismo tiempo, más estratégicas por los vasos comunicantes entre distintos actores ilegales. Mientras tanto, la legitimidad desde las acciones Estatales ha sido determinada por los tomadores de decisiones en presencia y en operaciones de la fuerza pública

colombiana, situación que refleja una debilidad institucional por la falta de lectura de contexto y entorno amazónico. De hecho, las lecturas de la gobernanza criminal suelen ser más efectivas al entender los roles y la morfología en la relación racional entre sociedad, crimen, economía y territorio.

En busca de resolver la inquietud expuesta, en primero lugar, se presenta una sección sobre la **amazonización**, dedicada a explicar la construcción del concepto en el marco de la agenda de seguridad. La idea es comprender de manera crítica la forma cómo desde el Estado colombiano es viable determinar una agenda de seguridad, con el Amazonas como centro de gravedad en la toma de decisiones y como prioridad estratégica.

En segundo lugar, se analizan las dimensiones mediante las cuales el Estado ha venido intentando forjar la legitimidad desde una perspectiva militar; mientras que los grupos armados organizados y el crimen han cimentado contralegitimidades estratégicas que les permiten cohabitar en los territorios a pesar de las maniobras y estrategias militares estatales.

En tercer lugar, se presentan las respuestas estatales y la configuración de las gobernanzas criminales; un coctel que combustiona la región amazónica colombiana y es razón de la inseguridad. Finalmente se presentan algunas reflexiones finales para potenciar nuevas líneas de in-

vestigación en materia de seguridad en Colombia.

AMAZONIZACIÓN DE LA AGENDA DE SEGURIDAD: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Es menester tener presente que, para el contexto colombiano, la región del Amazonas es un tema de vital importancia que no ha alcanzado el nivel de prioridad necesario para responder a las necesidades territoriales, sociales y de seguridad. La desconexión entre el centro con la periferia genera una vulnerabilidad mayor y significa una fractura en el proyecto de seguridad nacional.

Los Estados que comparten la región amazónica poseen nociones divergentes sobre la zona. Sin embargo, los actores involucrados que convergen en la región tienen como común denominador la visión determinada en los recursos naturales presentes en la Amazonia.

En particular, Colombia ha determinado un cúmulo jurisprudencial pertinente para definir la Amazonía en términos estratégicos importados, es decir, nos han hecho entender lo que entendemos por seguridad y nos han definido la seguridad en clave de cuestiones foráneas.

Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con la idea, noción, y doctrina de seguridad en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX bajo el marco de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional en el amparo de la Guerra Fría. Lógicas construidas bajo el entendimiento de la pug-

na entre amigo-enemigo (Mouffe & Laclau, 2007) y en síntesis, un sistema binario que cobraría importante carrera durante el conflicto armado colombiano.

El Estado ha definido su seguridad con base en el conflicto armado (Cavanaugh, 2012; Niño & Palma, 2018; Ríos, Bula, & Brocate, 2013) trayendo como consecuencia una parálisis estratégica sobre las dimensiones de seguridad (Borrero, 2019). En efecto, Colombia ha llevado el involucramiento de nuevos asuntos a la agenda de seguridad de manera muy lenta. Por ejemplo, la incorporación de las cuestiones ambientales como intersección estratégica en las dinámicas de seguridad apenas empiezan a vislumbrarse en los documentos de política pública en condiciones securitizadas.

En ese sentido, la securitización de la Amazonía como proceso de sincronización de asuntos localizados en la agenda de seguridad (Balzacq, 2005; Verdes-Montenegro, 2015) y del medio ambiente, han estado expresados por la construcción de patrones criminales rivales al Estado como la tala de árboles, el tráfico de personas y drogas ilícitas. Con base en lo anterior, se entiende por **amazonización** de la agenda de seguridad al proceso de asimilación estratégica referente al Amazonas como centro de gravedad y convergencia de las dinámicas vitales para la existencia del territorio. La amazonización reconoce la pugna entre la gobernanza oficial y las gobernanzas criminales como enclaves del conflicto y mutación del crimen y la violencia. Este concepto es una propuesta que es producto del presente capítulo.

LEGITIMIDADES Y CONTRALEGITIMIDADES. RADIOGRAFÍA CRÍTICA DE UN DILEMA DE SEGURIDAD

La región del Amazonas en Colombia es un escenario complejo y estratégicamente relevante. Posee las rutas y accesos terrestres para el comercio transfronterizo, abundantes dimensiones asociadas a los recursos naturales, diversidad de flora y fauna. Una zona que funge como pivote al ser atractivo por su ubicación, composición y riqueza estratégica con minerales como el titanio, cobalto, oro, manganeso, platino y diamantes, entre otras (Veyrunes, 2008). Al mismo tiempo es un área de difícil control territorial y escenario de convergencia de legitimidades y contralegitimidades de gran envergadura. El difícil control por parte del Estado es debido a los enclaves del conflicto colombiano como la ausencia de instituciones, las problemáticas de la tierra, la deforestación, la invisibilización de las comunidades indígenas, los cultivos de coca, la violencia, el desplazamiento y la porosidad de las fronteras (Rangel, 2008; Ríos, 2018; Yaffe, 2011). Debido a su carácter estratégico, en la zona cohabitan grupos criminales y armados que compiten por los mercados, la violencia y la industria en el lugar.

Sin la legitimidad, la definición de Estado es inconclusa y altamente peligrosa para su existencia. Entonces, es la legitimidad un factor fundamental para la definición de una seguridad nacional integral. La terminación del conflicto armado con las FARC-EP supuso la emergencia de nuevos grupos, fortalecimiento de otros, mutaciones y asociaciones

entre criminales para ocupar los espacios vacíos de la extinta guerrilla. Lo anterior podría determinarse bajo una geopolítica nacional criminal en la que son los grupos criminales quienes han instaurado órdenes y patrones sociales con fines de lucro y control territorial.

El crimen existe porque hay factores de legitimidad subterránea que lo soportan (Arrigo & Young, 1998), es decir, que es la legitimidad un vector de aceleramiento de procesos ilegales cuando se trata de una organización criminal la que funge como actor ordenador de estructuras sociales. Ese acontecimiento lo podemos denominar como contralegitimidad. Partiendo de eso, la pugna en Colombia entre legitimidades (Estado) y contralegitimidades (crimen organizado) genera causas subyacentes para la violencia e inseguridad en todo el territorio, en esta oportunidad en el Amazonas.

El crimen organizado representa una reconfiguración definicional sobre la seguridad en Colombia. De hecho, aquel viraje que se ha supuesto desde la terminación del conflicto armado, propone categorizaciones alrededor de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), nomenclaturas definidas por el Ministerio de defensa en la directiva 015 de 2016.

Tabla 1. Características de los grupos armados organizados

Los que ejerzan sobre una parte del territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.	La violencia ejercida es de cierta envergadura que el gobierno tiene que emplear a las Fuerzas Militares y no tan solo a la Policía Nacional.	Disponen de estructura armada organizada y generan violencia que superan los disturbios.
Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada 3 que supere la de los disturbios y tensiones internas.	Violencia sostenida, prolongada y extendida sobre territorios	Poseen jerarquías, mando y control
Que tenga una organización 4 y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros.		

Fuente: Elaboración propia con base en (Ministerio de Defensa Nacional, 2016)

En el Amazonas la volatilidad y presencia criminal es compleja. Por ejemplo, las llamadas “sociedades” madereras son una estructura criminal dedicada a la tala y tráfico de madera; operan entre Brasil y Colombia con la facilidad que otorga el corredor estratégico entre la selva binacional. Este modelo criminal ha construido una contralegitimidad en las poblaciones fronterizas de Leticia, Tarapacá, Mitú, Yavaraté, Pana Pana en Colombia con Tabatinga y Benjamín Constant en Brasil. Esa construcción está definida con la actividad maderera en la que campesinos e indígenas de la zona son contratados por las “sociedades” para la tala de árboles. Prometen modelos de protección a sus familias y un ingreso fijo.

Por otra parte, en esta radiografía, **la minería ilegal** desempeña un papel fundamental en la seguridad del Amazonas. En la geopolítica del crimen (Brown & Hermann, 2019) de los estados venezolanos fronterizos con Colombia como Bolívar, Apure y Amazonas, el ELN y disidencias de las FARC controlan poblaciones, rutas y minería. En esta oportunidad su contralegitimidad está asociada a la “formalidad” que le ha otorgado el régimen de Nicolás Maduro a las

actividades mineras, pues deben explotarlo, transportarlo y entregarlo al gobierno (Lares, 2018; Ministerio de Defensa Nacional, 2020).

Estas organizaciones extraen oro, diamantes, coltán y sumado a la actividad económica, poseen controles sobre los mineros artesanales, campesinos y comunidades locales. Así mismo deciden el orden, tránsito y control de las relaciones sociales fungiendo un rol paraestatal lo suficientemente peligroso para la seguridad regional.

Sin embargo, una de las estrategias con mayor eficacia para la construcción de contralegitimidades por parte de aquellos grupúsculos criminales es la tierra. En esencia, según los reportes y denuncias oficiales, están otorgando títulos de propiedad de manera ilegal (Lizcano, 2018). Aquí la intersección entre ilegalidad y contralegitimidad cobra un especial sentido. La deforestación, el acaparamiento de tierras, la extensión de la frontera agropecuaria y un aumento de los cultivos ilícitos junto con la minería ilegal son fenómenos que ocurren de manera acelerada y con especial sincronización por parte de los grupos criminales.

RESPUESTAS ESTATALES Y GOBERNANZAS CRIMINALES

En el marco de la Doctrina de Acción Integral de Colombia (Castillo & Niño, 2016) así como en el de operaciones conjuntas y combinadas en sinergia con agencias de Perú y Brasil, se han llevado a cabo tareas para combatir el crimen organizado en el Amazonas. La cooperación militar de espacio aéreo entre Brasil y Colombia que lleva aproximadamente una década en operación ha servido para monitorear y rastrear cierto tipo de actividades ilegales asociadas al narcotráfico y deforestación.

En condiciones nacionales, las operaciones militares hechas a principios de siglo, incluso cuando las FARC poseían un gran dominio territorial en la zona, han sido la traducción del uso legítimo de la fuerza para el control del territorio. A comienzos de 2003, se realizó con la Brigada Conjunta No. 26 en Leticia la primera operación conjunta denominada “Operación Mercurio”. Su objetivo era conocer las capacidades estratégicas de las fuerzas para desplegarse en la zona y a medida que evolucionaba la estrategia, se afinaban los detalles operativos.

De acuerdo con lo anterior, en un contexto más reciente y en medio de la pandemia de la Covid-19, se lanzó en marzo de 2020 la “Operación San Roque”. El objetivo es cuidar la salud pública en el Amazonas colombiano mediante el despliegue de las Fuerzas Militares para realizar acciones en aras del aislamiento obligatorio. Allí las actividades como los patrullajes, perifoneo aéreos y terrestres, así como también, la instalación de carpas y adecuación de escenarios con camas para atender los casos más críticos, representaron entre otras una estrategia por configurar una legitimidad sobre la población en medio de las dificultades colectivas de salud (Fuerza Aérea Colombiana, 2020). Lo ilustrado hasta el momento en esta sección responde a las acciones empleadas por el Estado para contrarrestar la presencia y actividades ilegales, pero no es suficiente si se observa desde el punto de vista de la legitimidad. Significa entonces que, en materia de seguridad, la criminalidad pervive gracias a las contralegitimidades que poseen estructuras al margen de la ley y que se blindan por la aceptación poblacional en la arquitectura del poder (Perliger & Palmieri, 2019). Allí se derivan las gobernanzas criminales.

La gobernanza criminal es una novedosa línea de investigación que ha venido tomando relevancia académica y científica en los estudios críticos de seguridad. La propuesta teórica sobre la gobernanza criminal propone que los grupos ilegales han determinado una estrategia de control, que incluso puede asemejarse a “un contrato social subterráneo” en el cual el hermetismo social es el componente orgánico que impide el ocaso del crimen. Esta dinámica significa que son estas estructuras capaces de generar órdenes paralelos, instituciones subterráneas y lógicas de ascenso social en el crimen.

Aquella gobernanza criminal ha forjado una *amazonización* de sus actividades ilícitas. Las acciones criminales han conquistado los espacios vacíos que las instituciones estatales y las

políticas públicas han dejado. Son dichas estructuras quienes conocen las particularidades del territorio, identifican las demandas sociales y las capitalizan para tejer vasos comunicantes de protección e incluso de “ascenso” en las organizaciones. Una característica clave que poseen los grupos armados organizados es que comprenden las dimensiones orgánicas de la población y las lógicas socioeconómicas que pueden ser fértiles para el crimen.

Dichas configuraciones de gobernanza criminal también responden a estímulos de la acción racional en la idea de aumentar los beneficios y reducir costos (Agnew, 2014; Banton, 1995; Shepsle, 2009). Las actividades criminales poseen mayores incentivos económicos debido al alto riesgo que tienen sus actividades, entonces, bajo esa perspectiva, la gobernanza criminal aglutina incentivos económicos y sociales de gran envergadura.

La cuestión tiene que ver en cómo se lucha contra los grupos armados organizados en clave de legitimidad. En ese sentido, es necesario mencionar que, en términos racionales, el crimen es más organizado que el Estado y aquella situación pone en desventaja estratégica a las instituciones y a los operadores de seguridad. La entropía de la inseguridad demuestra el desbordamiento de los problemas y amenazas sobre las capacidades exclusivamente estatales desde una perspectiva rígida de las políticas públicas (Schweller, 2014). Fenómenos que son los nuevos aceleradores de problemas y amplificadores de vulnerabilidades estructurales glocalizadas.

* Ph.D. Profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Salle (Colombia). Correo: cnino@unisalle.edu.co | cesarninogonzalez@gmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Arrigo, B. A., & Young, T. R. (1998). Theories of Crime and Crimes of Theorists. *Theory & Psychology*, 8(2), 219-252. <https://doi.org/10.1177/0959354398082009>
2. Brown, S., & Hermann, M. (2019). *Geopolitics and Transnational Crime*. Springer Link. https://doi.org/10.1057/978-1-137-49670-6_2

3. Castillo, A., & Niño, C. (2017). Nociones sobre seguridad y paz en las Relaciones Internacionales contemporáneas. Ediciones USTA. CO.
4. Cavanaugh, M. (2012). Theories of Violence: Social Science Perspectives. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 22(5), 607-618. <https://doi.org/10.1080/10911359.2011.598757>
5. Fuerza Aérea Colombiana. (2003). La Fuerza Aérea Colombiana en Operaciones Conjuntas | Fuerza Aérea Colombiana. <https://www.fac.mil.co/en/node/8900>
6. Lares, V. (2018, noviembre 13). Eln y disidencia de Farc controlan minas de coltán y oro en Venezuela - Venezuela - Internacional - EL TIEMPO.COM. Recuperado 1 de junio de 2020, de <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/eln-y-disidencia-de-farc-controlan-minas-de-coltan-y-oro-en-venezuela-291904>
7. Lizcano, M. (2018, agosto 5). Mafias criminales se adueñan de los bosques en Colombia. Recuperado 1 de junio de 2020, de <https://sinchi.org.co/mafias-criminales-se-adueñan-de-los-bosques-en-colombia>
8. Mouffe, C., & Laclau, S. (2007). En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica (FCE).
9. Niño, C., & Palma, D. (2018). Colombia en mutación: del concepto de posconflicto al pragmatismo del conflicto. *JANUS.NET e-Journal of International Relations*, 9(2), 82-97. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.9.2.6>
10. Perliger, A., & Palmieri, M. (2019). Mapping Connections and Cooperation between Terrorist and Criminal Entities. *Studies in Conflict and Terrorism*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2019.1678874>
11. Ríos, J. (2018). Transformations in the narrative of the Colombian Public Forces within the framework of the armed posconflict: from military victory to territorial peace. *Revista UNISCI*, 46, 219-234. <https://doi.org/10.5209/RUNI.58379>
12. Ríos, J., Bula, G., & Brocate, R. (2013). Estado, Estado de Derecho y violencia armada en Colombia (2000-2011). *Revista de Paz y Conflictos*, 6(0), 6-31. <https://doi.org/10.30827/revpaz.v6i0.427>
13. Rangel, A. (2008). Colombia: perspectivas de paz y seguridad. *Revista Criminalidad*, 50(1), 417-432.
14. Veyrunes, E. (2008). Las amenazas percibidas para la Amazonía: un estado del arte en términos de seguridad ambiental (No. 28). Bogotá D.C.
15. Yaffe, L. (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. *Revista CS*, 8, 187-208. <https://doi.org/10.18046/recs.i8.1133>

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS DE FUEGO

Carlos Guillermo Blanco*

Muchas cosas suceden en la mente de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley cuando su encuentro con un sospechoso se torna violento – el entrenamiento, el juicio y el autocontrol compiten con la confusión, la ira y el miedo. (Además, es probable que sea grabado en video). El oficial debe tomar de inmediato las acciones necesarias para protegerse a sí mismo y a otros, con profundas consecuencias psicológicas para éste. Esa actuación debe ser eficiente, legal, adecuada al nivel de peligro y, por muchas razones incluyendo su salud mental, ética.

¿Cómo desarrollar una mentalidad que produzca el cumplimiento de la misión y proteja contra los problemas legales y éticos? La preparación para el momento crítico requiere un programa sinérgico de entrenamiento ético, físico y mental – es el quid de la cuestión.

Los estándares internacionales. Se encuentran en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, adoptados por el 8vo Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Los Principios Nro 18, 19, 20 y 21 en particular, contienen recomendaciones para los gobiernos y las policías sobre las calificaciones, la capacitación y el asesoramiento. [1]

PRINCIPIO NRO 18. “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus

funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico”. [1]

La selección de candidatos que posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas. El Teniente del Departamento de Policía de Charlottesville (Virginia, EE.UU.) y Máster en Justicia Criminal, Brian N. O'Donnell, propone revisar el proceso de selección de los aspirantes a policías. Sostiene que la decisión de incorporar a alguien a un organismo encargado de hacer cumplir la ley está basada en la creencia de que posee las habilidades para desempeñarse con éxito en la profesión. La calificación es un proceso predictivo, pero falible, basado en un test de aptitud física, un test de aptitud mental, el chequeo de antecedentes, un perfil psicológico y una entrevista cara a cara (N.B.: mala predictora de la futura performance del postulante) – brindan información útil, pero insuficiente. [2]

Los exámenes de ingreso no reúnen información sobre muchas cualidades más importantes de los policías más destacados: la creatividad, la resiliencia, la compasión, la habilidad para evaluar las exigencias situacionales, y la toma de decisiones. Tampoco identifican cómo responde una persona a eventos estresantes – lo cual impulsa todos los demás atributos. Además no examinan –es difícil de medir– la ética del postulante. [2]

El proceso de selección debe evaluar el temperamento y la aptitud de un individuo, antes de su incorporación. Debería analizar cómo responde emocionalmente, cognitivamente y conductualmente, dentro de un entorno estresante y deliberadamente ambiguo. Requeriría que los aspirantes completen tareas grupales e individuales de resolución de problemas

que revelen rasgos particulares, la función cognitiva y las habilidades de comunicación bajo una variedad de restricciones diseñadas para inducir estrés. [2]

Mediría la resistencia psicológica del postulante – una característica individual importante asociada con la tolerancia al estrés y el desempeño exitoso en una profesión altamente exigente. Quienes demuestren los niveles apropiados de cualidades deseadas – intelecto, disciplina, toma de decisiones sensatas, paciencia, compasión (i.e., preocupación por los demás), resiliencia y disposición para aprender (cuán receptivo es) podrán ser elegidos para ingresar a la academia de policía. [2]

¿Qué es una Entrevista de Integridad? El Diccionario de la lengua española define a la persona ‘íntegra’ (del latín *int ger*, ‘íntacto’, ‘puro’) como recta, proba, intachable. En lenguaje coloquial, la integridad consiste en “hacer lo correcto, incluso si nadie lo está mirando”. [3] Aunque la integridad es una característica difícil de medir, es uno de los atributos más importantes de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

La Licenciada en Noticias y Periodismo Editorial Sarah Calams sostiene que la entrevista de integridad es importante para determinar si un candidato sólido es, además, probo. Esa entrevista coadyuvará a la evaluación objetiva de la confiabilidad del aspirante. [4]

La Oficial de Bomberos (R) Linda Willing, Licenciada en Estudios Americanos, Máster en Desarrollo Organizacional y Mediadora Certificada, explicó por qué los medios destacan las faltas cometidas por los funcionarios: “Haga lo correcto por-

que es correcto, pero también haga lo correcto porque su trabajo, respaldado por la moneda de la confianza pública, depende de ello”. [4]

Sin pretensión de exhaustividad, algunos ejemplos de preguntas basadas en la integridad son: 1) “Honestidad e integridad”, defínalos y responda por qué son importantes en la seguridad pública. 2) Discuta un momento en qué fue desafiada su integridad, ¿cómo lo manejó? 3) ¿Qué haría si un colega le pidiera que hiciera algo poco ético? 4) Si vio a un colega haciendo algo deshonesto, ¿le diría a su supervisor?, ¿qué le diría? 5) Su colega viene a trabajar con olor a alcohol, ¿qué haría? 6) Su supervisor le pide que vaya a su oficina para revisar su evaluación final de la probación y nota su aliento etílico, ¿cómo respondería? 7) Está en la escena de un accidente vehicular múltiple y su compañero encuentra un gran fajo de dinero enrollado en uno de los automóviles; lo ve tomar el dinero, guardarlo en el bolsillo y alejarse de la escena: ¿qué haría? [4]

El camino del Honor. El Detective (R) Francesco Vincent “Frank” Serpico del Departamento de Policía de Nueva York, que ganó fama por ser el primero en declarar como testigo en un juicio contra la corrupción policial, dijo: “El trabajo policial es una carrera honorable, si la hace con honor”. El camino del honor no siempre es fácil de seguir. Un funcionario que busca mantenerse fiel a sus principios y altos valores debe recordar que, cuando la tentación de sucumbir a la ira, la lujuria, la avaricia, o la presión del grupo, éstas pueden vender su honor por un centavo. Pero una vez perdido, no puede volver a comprarlo ni por un billón de dólares. Finalizar una carrera honorable en la aplicación de la ley es una satisfacción indescriptible. [5]

Usos (y mal uso) de los Códigos de Ética Policial. Los códigos de ética

tienen al menos seis usos. 1) Un código de ética puede establecer estándares especiales de conducta donde la experiencia ha demostrado que el sentido común es inadecuado – este es el uso más importante. 2) Un código de ética, al ser una formulación autorizada de las normas que rigen una práctica, puede ayudar a los nuevos en la práctica a aprender cómo deben actuar. 3) Un código de ética puede recordar a aquellos con una experiencia considerable, lo que de otro modo podrían olvidar. 4) Un código de ética puede proporcionar un marco para resolver disputas, incluso entre aquellos con experiencia considerable. 5) Un código de ética puede ayudar a quienes están fuera del grupo (“el público”) a comprender lo que razonablemente se puede esperar de aquellos dentro del grupo. 6) Un código de ética puede justificar la disciplina. Pero debe apuntar a ayudar a los disciplinados a comprender el código, no a castigar la mala conducta, porque convertirían al código de ética en una ley penal ordinaria. Un código de ética es para los honestos. La ley penal, para los deshonestos. [6]

PRINCIPIO NRO 19. “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo”. [1]

La capacitación. Destacamos la significación de la formación y la “capacitación profesional continua y completa”. [1] El Entrenamiento Básico inicial –impartido en las Academias de Policía– enfatiza la adquisición de competencias. El Entrenamiento en Servicio –impartido en los diferentes destinos–, su mantenimiento. Sin embargo, la singularidad de esta pro-

fesión requiere tener siempre presente la importancia de los valores éticos que comparte el organismo encargado de hacer cumplir la ley dentro de un Estado democrático.

La investigación sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puede ser llevada a cabo desde una sola perspectiva académica –e.g., ciencias jurídicas–. En tal caso, su abordaje metodológico centrado únicamente en el punto de vista de esa disciplina, es monoscópico.

Típicamente, la educación sobre el tema del epígrafe es acometida desde asignaturas como Criminalística, Derechos Humanos, Ética Profesional y Derecho Penal – legítima defensa, propia y de terceros, y delitos cometidos por funcionarios mediante el uso de las armas. En cambio, el entrenamiento se sujeta a la instrucción de tiro y a las destrezas con las armas de fuego. Cada una con sus enfoques monoscópicos – necesarios, pero insuficientes.

Los “silos en la educación” sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego son una estructura simple que mantiene las cosas compartimentadas, organizadas y seguras: un docente por aula, cada estudiante con su propio escritorio, y cada materia con su propia clase y horario. Las áreas temáticas –un saber en parcelas– permanecen constantes, sin conexiones transversales ni transferencia entre ellas.

Esos “silos” deben ser deconstruidos, i.e., deshacerlos analíticamente para darles una nueva estructura. Es necesario aspirar al pensamiento multidimensional y comenzar a establecer conexiones, a traspasar las fronteras y los tradicionales silos, y esforzarse por ensanchar el propio paradigma.

¿Por qué sabemos tan poco sobre entrenamiento policial y tiroteos, pero pretendemos saber mucho? La cuestión que nos ocupa es de interés

de varias disciplinas académicas porque cada una puede contribuir con diferentes observaciones y hallazgos al Corpus de Conocimiento de la Ciencia de la Fuerza. La educación y el entrenamiento basados en la ciencia requieren una aproximación completa y progresiva. Su abordaje metodológico, desde una postura integral para comprender sus múltiples dimensiones, es holístico.

La Ciencia de la Fuerza. El Dr. William J. Lewinski es un científico del comportamiento especializado en temas relacionados con el estudio de la conducta del oficial en los encuentros con uso de la fuerza. Obtuvo un Doctorado en Psicología con una concentración en la Psicología Policial, es Profesor Emérito de la Universidad Estatal de Minnesota, donde ha enseñado durante casi tres décadas. Fundador y Director del Instituto de Ciencias de la Fuerza con sede en Mankato (Condado de Blue Earth, Minnesota). Su abordaje actual está en los parámetros de acción/reacción, percepción, atención y memoria, y juicio. Su investigación ha sido diseminada en las publicaciones de la aplicación nacional de la ley, sitios web y noticias en línea electrónica. [7]

La Ciencia de la Fuerza es la investigación y la aplicación de los principios y procesos científicos imparciales para determinar la verdadera naturaleza del comportamiento humano en encuentros mortales y de alto estrés. Los estudios innovadores y reproducibles de la Ciencia de la Fuerza abordan los problemas reales que encuentran los oficiales de la ley en la calle y son meticulosamente documentados. [7]

PRINCIPIO NRO 20. “En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y

derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos”. [1]

El Policía como Protector Ético. La ética son valores morales en acción. Una persona que conoce la diferencia entre el bien y el mal –y prefiere el bien– es moral. Una persona cuya moralidad se refleja en su voluntad de hacer lo correcto –incluso si es difícil o peligroso– es ética. Comienza en el patio de la escuela. La mayoría sabe que el matón actúa mal: eso es moralidad. Pero sólo pocos hablan para proteger al acosado llamando a un maestro: eso es ético. Incluso muy pocos intervendrán físicamente para proteger efectivamente al acosado: esa es la conducta de un Protector Ético. [8]

¿Por qué hay Instructores de Tiro y Profesores de Defensa Personal, pero no hay Instructores o Profesores de Uso de la Fuerza? Los aprendientes parecen responder mejor cuando las historias con un fuerte impacto emocional que inspiran el comportamiento moral están entremezcladas con el entrenamiento físico realista. Ambos funcionan mejor en combinación y no por separado – y más que con un abordaje puramente intelectual, como una conferencia sobre la ética.

El Valor Universal de la Vida. Valorar la propia vida es sólo la mitad de la ecuación. El “Valor de la Vida” es un valor doble – propia y de los otros. Las personas éticas tienen un buen sentido de cómo mantener ese equilibrio. No hay un factor más importan-

te en cualquier nivel de la aplicación de la ley que el deber de proteger a la comunidad a la que se sirve. [8]

La igualdad entre las personas y el “derecho inalienable a la vida”, son los cimientos que sustentan el concepto del Protector Ético. El “doble valor de la vida” puede ser una excelente base moral sobre la que construir un sentido del deber de “proteger y servir” del funcionario encargado de aplicar la ley. Todos los comportamientos y las culturas son relativos, pero el Valor de la Vida es universal. [8]

La Supervivencia Ética. El peligro físico está entre los aspectos más fundamentales de la aplicación de la ley. Para sobrevivir, el funcionario entrena para auto-protegerse tanto física como mentalmente. Pero el peligro ético también puede ser fatal. Por cada oficial caído en cumplimiento de su deber, muchos son expulsados por mala conducta. A diferencia de aquellos que murieron honorablemente, esos últimos están vivos – pero caídos en desgracia. La supervivencia ética requiere preparar la psiquis con el mismo vigor usado para la supervivencia táctica. [9]

La creencia religiosa y la espiritualidad han jugado un gran rol vital para tomar decisiones. Aquellos oficiales que tienen un fuerte sistema de creencias son mucho menos proclives a extraviarse éticamente, que aquellos que no lo tienen. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley continúan perdiendo oficiales dedicados y talentosos debido a errores relacionados con la ética. Así como nos preparamos tácticamente para enfrentar las amenazas físicas, debemos auto-prepararnos mentalmente para las amenazas éticas. [9]

PRINCIPIO NRO 21. “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se

empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones”. [1]

¿Qué es el “deber de interceder”? El concepto no es nuevo. ¿Es una intervención activa ante el uso de fuerza excesiva por parte de otro oficial? El deber de intervenir y denunciar la mala conducta es el deber ético de todo policía de autocontrolarse, y controlar a la profesión. Es, además, un deber legal.

¿Por qué no interceden los policías? La percepción de un oficial (y los jefes) de la cultura policial, las amistades y el miedo a las represalias, puede hacerlo dudar. Aunque un oficial sabe que interceder y denunciar es lo correcto, no quiere ser etiquetado como “soplón”. O pueden racionalizar que no es su obligación decir que otro oficial está equivocado en su conducta. Los jefes y encargados a veces no abordan la mala conducta porque no quieren ser “los malos”. O tal vez sientan que no recibirán apoyo de un nivel superior si la abordan.

¿Por qué muchos policías no intervienen ni intentan desescalar? Por la presión de grupo, temor, prejuicio, apatía, no reconocer que están facultados para actuar, falta de entrenamiento / comprensión, y sobre todo, por la cultura policial (también llamada cultura organizacional o institucional). ¿Podemos superar este problema?

El Espectador Activo. Espectador: (Del latín *spectātor*, -ōris). 2. adj. Que asiste a un espectáculo público. [3] En inglés, un bystander, i.e., aquella persona que está presente en un evento o incidente pero no toma parte.

El sobreviviente del Holocausto, Dr. Ervin Staub, ha estado estudiando la psicología de la violencia, el genocidio y la moralidad durante décadas. Hoy en día, no lo preocupa el genocidio, sino el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías en los Estados Unidos.

En 2014 el Dr. Ervin Staub y otros consultores ayudaron al Departamento de Policía de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.) a desarrollar EPIC (*Ethical Policing is Courageous*, el Servicio de Policía Ético es Valiente), diseñado para educar, entrenar y apoyar a los policías en el “control mutuo”. Estima que, después del éxito inicial en una ciudad, puede cambiar la cultura policial en los EE.UU. El programa procura desalentar la mala conducta policial en todo el país después de meses de protestas por el uso excesivo de la fuerza.

El Proyecto ABLE (Espectador Activo en la Aplicación de la Ley) del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown está basado en EPIC y en la investigación del Dr. Staub. Es un programa de intervención entre pares que, coloquialmente, podemos sintetizar en torno a la siguiente idea: “No permita que me equivoque”.

A modo de cierre, a la complejidad de la situación le sumamos un dicho: “Las únicas dos cosas que a la gente no le gustan son el cambio, y la forma en que están las cosas”. Esto habla de la resistencia al cambio en cualquier cultura. Los planes de estudio y los programas de entrenamiento rara vez son inmunes a ello. “Siempre lo hicimos así” es una frase que resuena en las aulas, gimnasios, campos y centros de entrenamiento.

El cambio es difícil, pero es en la lucha donde crecemos – es en el desafío donde sacamos lo mejor de nosotros. La cultura dificulta los cambios en los paradigmas de la educación y el entrenamiento. La cultura es más que una política; una política puede cambiar con el trazo de un lápiz, pero la cultura nunca puede cambiar sin la influencia y los defensores adecuados.

* Carlos Guillermo Blanco. Comandante Mayor (R) de Gendarmería Nacional Argentina. Oficial de Estado Mayor (IUGNA, Argentina). Licenciado en Administración de Seguridad Pública y Oficial Graduado en Ciencias Policiales (Instituto Superior de Carabineros de Chile). Especialista en Docencia Universitaria (IUPFA, Argentina). Certificado en Justicia Criminal y Gestión

Policial (The Police Staff College, Bramshill, Reino Unido). Máster en Ciencias en Liderazgo y Gestión Policial (Universidad de Leicester, Reino Unido). Profesor Invitado por la Universidad de Magallanes (Chile), la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional (Ecuador), el CECO-PAZ-Perú y el CENCAPOPAZ-Argentina. Se desempeñó como Policía Internacional en tres Misiones de Paz de la ONU en la ex Yugoslavia (1999, 2000 y 2003). Es Profesor en el IUGNA y en el IUPFA.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. ONU. (1990). Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Recuperado el 02 de mayo de 2022 de <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>
2. O'Donnell, B. N. (2021). Repensar nuestro abordaje para la selección de Aspirantes a Policías. La traducción nos pertenece. Recuperado el 24 de septiembre de 2021 de <https://www.police1.com/police-performance/articles/digital-edition-developing-a-culture-of-accountability-trBMm6qA8KEWHvgM/>
3. RAE. (Actualización 2020). Íntegro. Diccionario de la lengua española. (23ª ed., actualización 23.5). Recuperado el 5 de mayo de 2022 de <https://dle.rae.es/>
4. Calams, S. (2017). What is an integrity interview? Police1. La traducción nos pertenece. Recuperado el 28 de septiembre de 2017 de https://www.policeone.com/police-jobs-and-careers/articles/423949006-What-is-an-integrity-interview/?NewsletterID=428182044&utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_content=Exclusives1LeftTitle&utm_campaign=P1Career&utm_id=usr_JTNqkqbWShFV8tSO
5. Marcou, D. (2010). Prevenir el error que puede terminar con su carrera. La traducción nos pertenece. Police1. Recuperado el 1 de octubre de 2010 de <http://www.policeone.com/officer-misconduct-internal-affairs/articles/2748069-Preventing-a-career-ending-mistake/>
6. Davis, M. (2007). Code of Ethics. The Encyclopedia of Police Science. (3ª ed.), pp. 188–191. Routledge. La traducción nos pertenece.
7. Force Science. (2012) ¿Quiénes somos? La traducción nos pertenece. Recuperado el 16 de febrero de 2012 de <http://www.forcescience.org/>
8. Hoban, J. (2010). El Guerrero Ético: Un modelo del Cuerpo de Infantes de Marina para los Policías. Police1. La traducción nos pertenece. Recuperado el 30 de abril de 2010 de <http://www.policeone.com/patrol-issues/articles/2054252-The-ethical-warrior-A-Marine-Corps-model-for-cops/>
9. Sutton, R. (2006). Ethical Survival: Officers must prepare for not only physical danger but ethical danger as well. Policing with Honor. La traducción nos pertenece. ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.129744-Ethical-Survival-Officers-must-prepare-for-not-only-physical-danger-but-ethical-danger-as-well/

LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO

José Adatty; Milena González; Cinthia Rosero; Valery Sandoval; María Laura Vásquez*

1. CONTEXTO CARCELARIO ACTUAL

La crisis que actualmente sufre el sistema penitenciario en Ecuador devela el profundo debilitamiento del Estado en su facultad para ejercer control sobre dicho sistema. “Durante el 2021 y hasta el 1 de diciembre, hubo 8 eventos violentos en centros de privación de libertad, en los que perecieron 316 personas”⁵. Uno de los primeros ocurrió en febrero del 2021 y todos en los Centros de Privación de Libertad de Azuay, Cotopaxi y Guayas. Se determinó que sucedieron como consecuencia de enfrentamientos entre privados de libertad pertenecientes a diversas organizaciones criminales, entre ellas aquella denominada “Los Choneros”. A raíz de estos hechos se suscitaron otros múltiples motines y pugnas en los meses siguientes hasta culminar el año. Estos sucesos dejaron un sinnúmero de víctimas fatales y personas heridas, entre ellas miembros del personal policial y personas privadas de libertad.

Tales episodios de violencia se han generado como consecuencia de múltiples factores. Entre ellos se encuentra la falta de un control efectivo por parte del aparato Estatal. Como evidencias: no existe el suficiente personal de seguridad en comparación con la sobrepoblación existente, generando que el ingreso de objetos ilícitos como drogas y armas sea mucho más fácil. Por otra parte, las redes de corrupción manejadas por bandas internacionales de narcotráfico son las que controlan los centros carcelarios⁶, lo que agrava la situación. Esto lleva a que dichas agrupaciones protagonicen eventos violentos con el fin de disputarse el control de los pabellones, llegando incluso a cobrar tarifas ilegítimas a los

privados de libertad para que estos puedan acceder a ciertos servicios básicos. “Los hechos de violencia ocurridos en 2021 en los diferentes centros no son actos aislados, sino que ocurren en un marco más amplio de lucha por el control y poder, tanto dentro como fuera de las cárceles”⁷.

En el transcurso del actual este período presidencial se ha observado una fuerte iniciativa para que las fuerzas armadas se involucren en el control en los centros de privación de libertad y el orden público, pero hay que recordar que la Constitución del Ecuador del 2008 prevé como misión de las Fuerzas Armadas el resguardo de la soberanía y la integridad territorial⁸. Lo que implica que, el entrenamiento que reciben está enfocado en derrotar al enemigo, debido a que el ambiente en el que desarrollan su misión de protección es diferente al de los guardias de seguridad penitenciarios en los centros de privación de libertad. Si bien a simple vista podría ser una solución por parte del ejecutivo, hay que recordar que las F.F.A.A no están capacitadas para lidiar con situaciones de control carcelario, por lo que, su intervención podría desencadenar en una mayor vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Tomando en cuenta lo expuesto, hay que recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado con respecto de la intervención de las fuerzas Armadas a los centros penitenciarios y ha establecido limitaciones y requisitos para que esta intervención pueda realizarse. Además, el ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que trata parcialmente el tema relacionado a la situación carcelaria, por lo cual, este artículo se centrará en desarrollar estos puntos para ejemplificar

las situación normativa actual y las irregularidades del proyecto ley presentado por el ejecutivo.

2. REQUISITOS PARA INTERVENIR EN CÁRCELES SEGÚN LA SENTENCIA NO. 33-20-IN/21 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

El mantenimiento del orden interno, en caso de que no sea suficiente el control de los Guardias Penitenciarios, corresponde a la Policía Nacional, pues son estos quienes tienen el adecuado entrenamiento para ello. Por lo tanto, la intervención de las Fuerzas Armadas sería excepcional y, necesariamente, en colaboración a la Policía Nacional. En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha determinado que la intervención conjunta de ambos cuerpos debe ordenarse por medio de un estado de excepción emitido por el presidente.

Además del requisito de estado de excepción establecido en la Constitución, la Corte Constitucional en la sentencia No. 33-20-IN/21 ha desarrollado otros requerimientos donde la colaboración entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas debe ser: i) extraordinaria, ii) subordinada y complementaria, iii) regulada, iv) fiscalizada.⁹

De allí que en referencia al proyecto de Ley mencionado, el carácter extraordinario de la colaboración requerida por el Ejecutivo deba ser excepcional, temporal y restringida. La Corte Interamericana ha determinado que el empleo de las Fuerzas Armadas:

debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna, dado que el entrenamiento que reciben las fuerzas

militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales¹⁰.

Con respecto al segundo requisito de subordinación y complementariedad, este se cumple cuando la colaboración está sometida a “las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.”^[11] Es decir, las Fuerzas Armadas no podrán suplir ni subrogarse funciones que estén contempladas para cuerpos especiales de la Policía. Asimismo, en cuanto al tercer requisito, la colaboración está regulada cuando se establezcan mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza.

Y finalmente, en lo que respecta al parámetro de fiscalizar, la CIDH ha señalado que “la prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería inefectiva, en la práctica, si no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales.”¹² En consecuencia, no hay parámetros por medio de los cuales la sociedad civil pueda realizar un control público a las acciones que se emprendan.

Incluso con el cumplimiento de dichos requisitos, la intervención de las Fuerzas Armadas es limitada. La Corte Constitucional determinó que la “movilización e intervención de la fuerza pública es constitucional siempre que se circunscribe al perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso, de los Centros de Privación de Libertad.”¹³

3. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA

A fin de lograr una respuesta integral del sistema al agudo problema de seguridad que sufre el Ecuador en la actualidad, el ejecutivo presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. En dicha iniciativa se tratan puntos como el uso progresivo de la fuerza utilizada por el Estado; capacitación de los funcionarios judiciales en el tema; reformas procesales penales; desarrollo legislativo de los estándares del uso de la fuerza dictaminados por la Corte Constitucional; y, el rol complementario de las Fuerzas Armadas. Esta parte del trabajo, sin embargo, se enfocará en el rol complementario de las Fuerzas Armadas.

Dentro del Proyecto de Ley, dos artículos contemplan la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, que podrían utilizarse para lograr la intervención de las Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad. En primer lugar, el artículo 12 del Proyecto de Ley otorga a la Policía Nacional la competencia de solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, lo que permitiría a ambos cuerpos ingresar en los centros de privación de libertad. Sin embargo, no existe delimitación de la colaboración a períodos excepcionales, ni se cumplen los requisitos establecidos por la Corte Constitucional.

El artículo 12 del Proyecto de Ley no establece como requisito para la colaboración de ambos entes un estado de excepción, ni una orden por parte del presidente. Por esta razón vulnera los artículos 158 y 165 de la Constitución. Además, se subordina la colaboración al crimen organizado. Este concepto, además de ser general e indeterminado, no está limitado de manera temporal. En conjunto, el Proyecto de ley no regula de manera específica las actividades que pueden realizar las Fuerzas Armadas en colaboración con la Policía Nacional.

Como consecuencia, no se verifican los criterios de subordinación ni de regulación. Finalmente, el Proyecto de Ley omite formas de fiscalizar de manera independiente la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por lo que tampoco se cumple con el requisito de fiscalización.

Además, este artículo es inconstitucional ya que permite que las Fuerzas Armadas invadan competencias exclusivas de la Policía Nacional. Por último, cabe recalcar que el principal motivo de colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional radica en la misión constitucional del mantenimiento del orden público en periodos extraordinarios, no en la lucha contra el crimen organizado o la protección interna de los ciudadanos, como pretende este Proyecto de Ley, más aún cuando el concepto de crimen organizado no se encuentra desarrollado con claridad.

En segundo lugar, el Proyecto de Ley en el artículo 14 contempla un estado de emergencia del sistema de seguridad, durante el cual los ejecutores de la seguridad pública podrán cooperar en ciertas operaciones. Si bien dicho artículo subordina la colaboración a un período de emergencia, no es constitucional, ya que la colaboración para mantener el orden público sólo puede darse cuando existe un estado de excepción. Dicho estado de emergencia no es asimilable en modo alguno al estado de excepción, puesto que difieren en varios aspectos. Por ejemplo, decreto de estado de excepción debe contener ciertos elementos, como la “determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse.”¹⁴ Pero, el Proyecto de Ley no establece los elementos que debe contener la declaración del estado de emergencia, no cumple con la motivación, ni limita territorialmente la

colaboración entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Igualmente, es imperativo recalcar que el estado de excepción tiene una duración máxima de 60 días y solo puede ser renovado por 30 días hasta una vez.¹⁵ Al contrario, el Proyecto de Ley establece que el estado de emergencia podrá durar noventa días y podrá ser renovado por 90 días hasta dos veces. Otra diferencia sustancial, respecto de un caso de estado de excepción, es que el presidente debe notificar a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Sin embargo, la declaración de estado de emergencia no debe ser notificada a ente alguno. Por otra parte, la declaración del estado de excepción está sujeta a control de la Asamblea Nacional, que puede revocar en cualquier momento; además, de estar sujeta a un control posterior obligatorio por parte de la Corte Constitucional.

Es evidente, pues, que este Proyecto de Ley crea una institución paralela que será empleada para saltarse el procedimiento de colaboración más estricto establecido en la Constitución, con el objetivo de lograr la intervención de las fuerzas armadas en el sistema carcelario. Tomando en cuenta que, el estado de excepción es un antecedente indispensable para el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de los centros de privación de libertad, vulnerando los artículos 158 y 165 de la Constitución.

4. CONCLUSIÓN

El Ecuador está inmerso en una “crisis carcelaria”, puesto que en los últimos años se han evidenciado varios eventos violentos en los distintos centros de privación de libertad del país, los cuales dieron como resultado víctimas fatales y heridos, tanto de miembros de la Policía Nacional (PNE)

como de los privados de libertad. En ese contexto, se han planteado varias alternativas para hacer frente a este problema, entre ellas, la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en las cárceles. No obstante, el marco legal ecuatoriano impone ciertos límites y requisitos a esta propuesta. La Corte Constitucional estableció que la colaboración entre la PNE y las FFAA debe ser: (i) extraordinaria, en cuanto debe ser excepcional, temporal y restringida; (ii) subordinada y complementaria, puesto que los militares no pueden suplir o subrogarse funciones de la PNE; (iii) regulada, mediante normas y protocolos; y, (iv) fiscalizada, con mecanismos que verifiquen el cumplimiento de la normativa, especialmente, la legalidad del uso en la fuerza letal.

En este contexto, el ejecutivo presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que trata, entre varios puntos, el rol complementario de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. El Art. 12 del Proyecto de Ley, permite a la PNE solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Esta norma vulnera los Arts. 158 y 165 de la Constitución de la República ya que no cumple con los requisitos determinados por la Corte Constitucional: permitiría a miembros militares entrar a las cárceles; no delimita períodos excepcionales; no regula de manera específica las actividades de colaboración que pueden realizar las FFAA y tampoco establece métodos de fiscalización independientes. Además, el concepto de crimen organizado no está desarrollado o definido en la legislación ecuatoriana, se trata de un término indeterminado que, al emplearlo de esa manera, vulneraría el principio constitucional de seguridad jurídica, así como las normas de competencia que establece la Constitución para Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Por otro lado, el Art. 14 del Proyecto de Ley establece que los órganos ejecutores de la seguridad pública podrán cooperar en ciertas operaciones cuando se establezca un estado de emergencia. Este período o “estado”, prima facie, parece cumplir con el requisito de colaboración extraordinaria; sin embargo, es inconstitucional porque la cooperación interinstitucional para mantener el orden público (FFAA y PNE), de acuerdo con la Constitución, solo puede realizarse en los estados de excepción. El estado de emergencia sería una nueva figura legal que, sin cumplir con los requisitos del estado de excepción (determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, período de duración, medidas que deberán aplicarse, derechos que podrán suspenderse o limitarse), pretende operar de forma idéntica para obtener los mismos fines. Por lo expuesto, tanto el artículo 12 como el 14 del Proyecto de Ley serían inconstitucionales en función de los criterios vinculantes expuestos por la Corte Constitucional en sus sentencias. Al respecto, la solución sería adecuar la propuesta legislativa a los criterios de la Corte o plantear la acción constitucional correspondiente a fin de que sea la misma Corte Constitucional, en pleno gozo de sus facultades, quien cambie sus precedentes jurisprudenciales.

*José Adatty; Milena González; Cinthia Rosero; Valery Sandoval; María Laura Vásquez son integrantes de la Clínica de Derecho Administrativo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), dirigida por el Dr. Juan Pablo Aguilar. Una versión más extensa y completa de este alegato ha sido enviada, por sus autores, a la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Caso Alvarado Espinoza y otros c. México, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 de noviembre de 2018, párr. 179.
2. Sentencia No. 33-20-IN/21, párr. 97.
3. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) c. Venezuela, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 05 de julio de 2006, p. 79.
4. Dictamen No. 5-21-EE/21, Corte Constitucional, 06 de octubre de 2021, párr. 63.

5. Artículo 164, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008

6. Artículo 166, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008

7. Informe Personas privadas de libertad en Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2022, Informe, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2022, OEA/Ser.L/V/II, 21 febrero 2022, párr. 28

8. BBC News Mundo. (9 de Mayo de 2022). BBC News | Mundo. Obtenido de BBC News | Mundo Web site: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61326507>

9. Ibid, párr. 166

10. Artículo 158, Constitución de la República del

Ecuador, Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

11. Sentencia No. 33-20-IN/21, Corte Constitucional, 05 de mayo de 2021, párr. 97.

12. BBC News Mundo. (9 de Mayo de 2022). BBC News | Mundo. Obtenido de BBC News | Mundo Web site: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61326507>

13. Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

14. Caso montero Aranguren y otros (Retén de Catia) c. Venezuela, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 05 de julio de 2006.

15. Caso Alvarado Espinoza y otros c. México, Corte Interamericana de Derechos Humanos,

28 de Noviembre de 2018.

16. Dictamen No. 5-21-EE/21, Corte Constitucional, 06 de octubre de 2021, párr. 63

17. Informe Personas privadas de libertad en Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2022, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2022, OEA/Ser.L/V/II, 21 febrero 2022

18. Sentencia No. 33-20-IN/21, Corte Constitucional, 05 de mayo de 2021

CRONOLOGÍA BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Daniel Cabrera*

Investigador Programa DSD

CRISIS CARCELARIA

TRAUMAS MENTALES SE AGRAVAN POR DÉFICIT DE PSICÓLOGOS EN PRISIÓN.

El Código Orgánico Integral Penal en su art. 700 establece que el Sistema Penitenciario dará “asistencia social y psicológica durante y después del cumplimiento de la pena”. Pero a nivel nacional existen 95 psicólogos para una población de 37.347 privados de la libertad en 53 centros. Según el Comité de Defensa de los Derechos Humanos: “La gente ingresa a la cárcel sin ningún registro, sin ningún diagnóstico, y el Estado lo olvida a su suerte. El Universo, 2 de enero de 2022. <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/traumas-mentales-se-agravan-por-deficit-de-psicologos-en-prision-nota/>

MILITARES INSTALAN UN CAMPAMENTO CERCANO A LA PENITENCIARIA, PARA REACCIONAR MÁS RÁPIDO ANTE POSIBLES DISTURBIOS.

En el perímetro cercano a la Cárcel del litoral se instaló un campamento militar para controlar la zona aledaña, al centro penitenciario, donde la semana pasada se encontraron cientos de armas blancas de elaboración artesanal. El Universo, 8 de febrero de 2022. <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/desde-un-campamento-en-el-que-hay-centro-de-mando-los-militares-intentan-reaccionar-mas-rapido-a-disturbios-en-la-penitenciaria-nota/>

INFORME DE LA CIDH: LA CORRUPCIÓN FACILITA EL INGRESO DE ARMAS Y DROGAS A LAS CÁRCELES.

La Comisión luego de su visita al Ecuador, determinó que existen principalmente seis factores que ahondan la crisis carcelaria en el país. Entre ellos: debilitamiento de la institucionalidad, catálogo de delitos que privilegia el encarcelamiento, el aumento de penas por delitos de drogas, el uso excesivo de la prisión preventiva (causa hacinamiento), los obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios penitenciarios y las deplorables condiciones en las que viven los PPLs. Según la CIDH la corrupción redundará en problemas como el ingreso de armas y drogas, a los Centros de privación de libertad. El Comercio, 18 de marzo de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/informe-cidh-la-corrupcion-facilita-el-ingreso-de-armas-y-drogas-a-las-carceles.html>

500 PERSONAS PERDIERON LA VIDA EN LAS CÁRCELES DE ECUADOR DURANTE EL 2021.

La SNAI reconoció la veracidad de esta cifra y su Director Pablo Ramírez, confirmó que la mayoría de los decesos se produjeron por violencia intracarcelaria, por enfrentamientos armados entre bandas delictivas rivales dentro de los Centros de Rehabilitación del país. El Comercio, 2 de abril de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/personas-carcel-ecuador-pierden-vida.html>

ONU INSTA A ECUADOR A HACER UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA PENAL.

Después de la última masacre carcelaria, que ocasionó 44 fallecidos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, el lunes 9 de mayo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, expresó “su profunda preocupación por la constante violencia en las cárceles del país, donde han fallecido cerca de 400 reos en menos de dos años”. Por esta razón, destacaron la importancia de una reforma integral del ordenamiento jurídico penal, incluido el sistema penitenciario. El Universo, 10 de mayo de 2022. <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/onu-insta-a-ecuador-hacer-una-reforma-integral-al-sistema-penal-nota/>

CRISIS CARCELARIA: DEPURACIÓN DE PERSONAL E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA, ENTRE LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE SUGIEREN ESPECIALISTAS TRAS MASACRE.

La implementación de tecnología de máxima seguridad en los centros de rehabilitación del país, es un imperativo para el gobierno según coinciden algunos especialistas en seguridad. Sin embargo, también se recomienda un proceso de depuración de las instituciones de seguridad, ya que la corrupción es un general. El Universo, 10 de mayo de 2022 <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/crisis-carcelaria-depuracion-de-personal-e->

EL HACINAMIENTO EN CENTROS CARCELARIOS DE ECUADOR BORDEARÍA EL 14%; SNAI aspira a que hasta finales del 2022

por indultos salgan unas 5.000 personas privadas de la libertad. Los datos disponibles indican que hay unos 36.599 reos en 36 centros de detención en Ecuador, pero la capacidad sería de 30.169. De los más de 36.000 detenidos, 34.207 (93,46%) correspondían a hombres y 2.392 (6,54%) a mujeres, según un informe que la CIDH presentó en febrero del 2022, tomando como referencia los datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). El Universo, 15 de mayo de 2022.

CASI EL 30% DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN ECUADOR ESTÁN DETENIDOS POR DELITOS LIGADOS A TRÁFICO DE DROGAS-

En el Ecuador las detenciones relacionadas con el tráfico de

drogas tienen un porcentaje alto. Es así, que, al 25 de marzo de 2022, las detenciones por delitos relacionados con el tráfico de drogas acumulan mayor número de personas privadas de la libertad en Ecuador: 10.196, el 28,71% del total. En la penitenciaría del Litoral está el mayor número de detenidos por estos casos. El Universo, 24 de mayo de 2022. <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/casi-el-30-de-los-privados-por-libertad-en-ecuador-estan-por-delitos-ligados-a-la-droga-nota/>

II. CRIMEN ORGANIZADO Y TRÁFICO DE DROGAS

LA INCIDENCIA DEL NARCOTRÁFICO AFECTÓ LA VIDA EN BARRIOS

El ruido de los disparos se volvió algo común entre los pasajes del cerro Las Cabras de Durán, en Guayas. La Policía Nacional ha identificado a este como uno de los 16 sectores críticos de la denominada Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborombón. Cifras de la Policía Nacional confirman que las dos primeras ciudades son las más violentas del país con más de 500 asesinatos. El recrudecimiento de la violencia se encuentra ligado al narcotráfico y a la disputa entre las bandas criminales. El Comercio, 02 de enero de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/narcotrafico-barrios-guayaquil-duran-cadaveres.html>

LA MAYOR INCAUTACIÓN DE DROGA EN LA HISTORIA DEL PAÍS FUE EN 2021

La última incautación de droga de 2021 se registró en el Puerto Marítimo de Guayaquil. El 31 de diciembre pasado, agentes Antinarcóticos desplegaron un operativo en ese lugar y se incautaron 795 kilos de cocaína. La droga se encontraba oculta en 33 sacos de harina dentro de un contenedor. En 2021, las cifras de incautaciones cerraron en 210 toneladas a escala nacional. Esta cifra supera las 128 toneladas de 2020 y las 82 toneladas de 2019. El Comercio, 5 de enero de 2022. Las bodegas de la Zona 8 están saturadas de droga; en el país ya van más de 30 toneladas incautadas <https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/las-bodegas-de-la-zona-8-estan-saturadas-de-droga-en-el-pais-ya-van-mas-de-30-toneladas-incautadas-nota/>

EN CAJAS DE BANANO SE ALISTABAN PARA EL ENVÍO POR VÍA MARÍTIMA DESDE GUAYAQUIL A EUROPA.

En los cartones se encontraron 7 toneladas de cocaína, cifra calificada como la mayor incautación

en puertos marítimos del país en este año. Holguer Cortez, subcomandante de la Zona 8 de la Policía, mencionó esta semana que las bodegas antinarcóticos estaban saturadas de sustancias ilícitas debido a la gran cantidad de alcaloides en entes competentes para continuar los procesos administrativos de destrucción del material. El Universo, 18 de febrero de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/empleados-puerto-guayaquil-droga-contenedores-detenidos.html>

LABORATORIO PARA PROCESAR DROGAS FUE DESCUBIERTO EN MATAJE, ESMERALDAS

Tras nueve meses de investigaciones, la Policía Nacional detuvo a 12 presuntos integrantes de una organización delictiva Los Tiguerones. Esta captura se dio durante operativos ejecutados en Esmeraldas y Quito, este viernes 11 de marzo del 2022, por miembros de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico ilícito para Consumo Interno de la Policía. En Esmeraldas, en Mataje la Policía halló un laboratorio de procesamiento y refinamiento clandestino de droga. El Comercio, 11 de marzo de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/laboratorio-procesamiento-drogas-mataje-tiguerones.html>

III. BANDAS CRIMINALES-SICARIATO-

LÍDERES DE BANDAS PLANTEAN PACIFICACIÓN EN EL MARCO DE LA CRISIS CARCELARIA.

Claudia Garzón, quien dirige la comisión de pacificación creada por el Gobierno tras la crisis carcelaria, confirmó el supuesto interés de estas bandas, que la han considerado como mediadora de las organizaciones. Según la colombiana, los líderes de estas organizaciones han expresado su voluntad de tener paz. las bandas dicen que se “han dado cuenta de la dolorosa realidad” del país y que patrocinado esta guerra. Este pronunciamiento fue enviado con el logotipo de los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings. El Universo, 18 de mayo de 2022. <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/quienes-son-los-lideres-de-las-bandas-que-plantean-pacificacion-algunos-cabecillas-estan-libres-nota/>

SEIS MAFIAS INTERNACIONALES TIENEN NEXOS EN ECUADOR

La muerte de un extranjero en Guayaquil llamó la atención de la Policía Internacional (Interpol). La información alertó que el hombre de

origen albanés era uno de los cabecillas más importantes del tráfico de drogas a Europa y parte de Asia. Se cree que en el Ecuador hay presencia de mafias: albanesa, rusa, colombiana, mexicana, entre otras. El Comercio, 03 de febrero de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/mafias-internacionales-nexos-ecuador-drogas.html>

DIFERENTES MAFIAS CAUSAN TERROR Y SE DISPUTAN EL TERRITORIO EN LA ZONA 8 (GUAYAQUIL Y DURAN)

El 86% de los crímenes en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón, ocurre por disputas en torno al tráfico de drogas, un 8% por violencia interpersonal y el 6% por robo. En este territorio el incremento de la violencia se evidencia con decapitados, colgados en puentes, drones con explosivos y coches bomba. La cifra de homicidios intencionales ha crecido en relación al 2021 de 234 homicidios a 577 en 2022, y seis distritos concentran el 80% de los asesinatos. El Universo, 31 de mayo de 2022. La mafia mexicana, italiana, albanesa y china causan terror y se disputan territorio; estos son los sectores con más asesinatos en Guayaquil, Durán y Samborondón | Informes | Noticias | El Universo

DURÁN SE CONVIRTIÓ EN CENTRAL DE ABASTECIMIENTO PARA EL SICARIATO.

Los asesinatos son un negocio en Durán. Este cantón, cercano a Guayaquil, se ha convertido en el centro de operaciones de los brazos armados que sirven a las bandas criminales más peligrosas del país. El 14 de febrero, la conmoción social se tomó las calles de la ciudad, cuando dos cadáveres fueron encontrados en uno de los puentes peatonales más concurridos de la ciudad. Sin embargo, este es uno de algunos de los hechos violentos, que se han desarrollado en Durán. Aquí según las autoridades las células de micro expendederos buscan reclutar nuevos vendedores de droga, pero también nuevos sicarios para sus filas. El Comercio, 15 de febrero de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/duran-central-abastecimiento-sicariato-cadaveres.html>

ESTAS SON LAS CINCO PROVINCIAS CON MÁS MUERTES VIOLENTAS EN LO QUE VA DEL 2022.

El Incremento de las muertes violentas es una realidad en el país y esto, se refleja en muchas de las provincias del Ecuador. Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro lideran el número de muertes violentas hasta

el 16 de febrero. Por ejemplo, en Guayas las muertes violentas en 2021 llegaron a 77, y en 2022, ya rondan las 214; en Manabí, de 26 a 45; en los Ríos de 5 a 43, lo que refleja un incremento significativo, en esta última provincia. El Universo, 18 de febrero de 2022. <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/estas-son-las-cinco-provincias-con-mas-muertes-violentas-en-lo-que-va-del-2022-nota/>

CARGADORES “DE GUERRA” ENVIADOS POR COURIER A GUAYAQUIL En siete paquetes de encomienda camuflaron las alimentadoras para armas de largo y corto alcance. Víctor Zárate, comandante policial de la Zona 8, calificó como cargadores “de

guerra” a los implementos que se pretendían ingresar por Courier a Guayaquil. Zárate informó del hallazgo la mañana de este viernes 4 de marzo de 2022. Se trata de 20 cargadores de armas largas, para munición de calibre 5,56 tipo fusil. También se hallaron cinco cargadores para pistolas. EL Comercio, 4 de marzo de 2022. <https://www.elcomercio.com/actualidad/cargadores-guerra-courier-guayaquil-aeropuerto-seguridad.html>



Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos (PUCE)
- Francisco Rhon Dávila (CAAP)
- Juan Pablo Aguilar USFQ
- Marco Romero Cevallos UASB
- David Arcentales (PUCE)
- Cristina Chuquimarca (PUCE)

Asesoramiento Internacional:

- Dr. Gustavo Suárez Pertierra-UNICEF-España.
- Dr. Louis Goodman-American University (USA)

Investigador:

- Daniel Cabrera Borja

Programa Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 12, oficina 10.

Teléfonos: (593-2) 299 1041 / (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Este boletín forma parte de los proyectos de vinculación con la colectividad de la PUCE

Correspondencia y solicitud de ejemplares: programa.dsd.puce@gmail.com

